

particular que sirva de declaratoria al recurso interpuesto, y del caso no comprendido en la ley de 19 de Abril de 1813; pues aunque el personal del Tribunal ha formado opinion sobre el particular, sostenida por resoluciones superiores dictadas con anterioridad, no le es legal resolver el caso por las razones antes dichas, ó falta de competencia, ni de volver la actuacion al Juez inferior, por no dejar sin efecto el ocurso aducido, que se resolverá con acierto de un modo legal por la superioridad que le corresponde su conocimiento.

Por todo lo expuesto, de conformidad en parte con lo pedido por el C. Promotor fiscal y mediante los fundamentos expresados; fallo:

No es competente el personal del Tribunal para conocer en grado, del recurso de apelacion interpuesto y admitido por auto de 27 de Abril próximo pasado; y en consecuencia, remítase este expediente á la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia para su conocimiento, y previa citacion de las partes, las que tienen su derecho expedito para deducir en forma ante la superioridad, dentro de doce dias, término señalado para que llegue á su destino el expediente que se remitirá de parte: notifíquese y repónganse las fojas del sello quinto con las que corresponden. El C. Magistrado de Circuito, así lo decretó y firmó. Doy fé. (Firmados.)---*Aurelio Ramis Portugal.*---*Ramon Reynoso.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por el Lic. D. Francisco Romunillos por sí y en representación de los Sres. Peña y O^a Diego Peña, Antonio Peña, Mateo Magaña y O^a y otros, contra el C. Tesorero general del Estado, que les exige el medio por ciento que impone el decreto núm. 119 de la Legislatura del mismo Estado, de 5 de Abril último, á todo capital y sueldo anual de mil pesos en adelante, con cuya disposicion dicen, se falla á lo mandado en la fraccion 2^a art. 31 de la Constitucion del Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez:

El Promotor fiscal accidental dice: que está muy bien impuesto de que el presupuesto de ingresos del Estado, basta para cubrir el de egresos ordinarios, de automano establecidos, y sobra mensualmente una cantidad muy considerable para crearse un fondo, á fin de atender á las circunstancias anómalas que con frecuencia han tenido lugar en varias poblaciones foráneas y aun edificar penitenciarías, establecer escuelas que no hay ni aun en Mocorito; construir caminos, fincar una casa para el palacio del Gobierno, que no la tiene, y por último, sin necesidad de apelar á la odiosa cantinela de contribuciones extraordinarias, que con cualquier frívolo pretexto, como el pequeño movimiento de Andrade, invocan los legisladores del Estado su consabido estribillo para estorcionar un poco y hacerse de recursos que se necesitan en la actual época de agitacion electoral, como lo dicen menos claro los preliminares del decreto 114 de dicha Legislatura que corre agregado á fojas 9 de este expediente.

¿Tiene la culpa el propietario y el comerciante de que los altos funcionarios sean morosos en exigir de los recaudadores foráneos, el exacto cumplimiento de sus deberes? Es público y notorio á todo sinaloense, que en los Distritos foráneos no se recauda ni la quinta parte de las contribuciones decretadas en el presupuesto de ingresos; ¡qué digo! no ha muchos días fué denunciado por la prensa de esta capital, el hecho de que el Tesorero municipal de la villa del Fuerte, aprehendió como contrabando mas de cuarenta barriles de vino mescal que resultaron ser del Administrador y recaudador de rentas del mismo Distrito. Este hecho no necesita comentarios, y desde luego puede conocerse como cumplen los empleados de segundo órden, en el ramo hacendario, con las obligaciones de su destino. ¡Y se quejan los diputados de que el «Erario del Estado está exhausto y sin ingresos!»

Los legisladores pues, para prevenir enojos de sus comitentes, y tener con que subvenir á los gastos ordinarios y extraordinarios, tienen el remedio de procurar la estricta vigilancia á sus dependientes, á fin de conseguir lo que, segun el presupuesto de ingresos, debe dar la propiedad raíz y moviliaria de la Capital y de los Distritos; y es evidente que desterrando el favoritismo y el disimulo del contrabando, se consigue, que á mas de pagar la lista de los empleados de todas clases y categorías, con la regularidad que mandan la justicia y la equidad, tendria la Tesorería general un fondo muy considerable para subvenir á las atenciones extraordinarias. Pero toda vez que lejos de haber ese fondo se están debiendo sus sueldos á los empleados de esta capital, de mas de dos meses y hasta doce meses á los foráneos, los propietarios y los comerciantes tienen sobrada razon de alzar su voz contra tan desconsiderados representantes del pueblo sinaloense en el Congreso del Estado, que por no remediar oportunamente y reprimir un delito, decretan otro mal; pues

es indudable que esa contribucion es el resultado de un punible disimulo, y una fatalidad, que á ningun diputado le dé lástima que con la sávia del pueblo estén muchos abusando.

Lo dicho equivale, á que no han sabido los representantes del pueblo en el Congreso particular, ejercitar debidamente los derechos de sus comitentes; pero proclamando la soberanía del Estado, han pedido decretar la contribucion de que se quejan los ciudadanos que piden el amparo y proteccion de la justicia federal; y en concepto del Promotor que suscribe, no está violado el art. 31 en su fraccion 2ª como dicen los quejosos: vease el art. 41 de la Carta fundamental de la Nacion. Dicho Código no ha prohibido las contribuciones extraordinarias de la República; solo ha querido que los gastos públicos se paguen por todos «de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.»

Hay que lamentar, que habiéndose podido quitar al Congreso el pretesto de que se valió para imponer una contribucion de tan pingües resultados, por ocho ó nueve mil pesos que se gastaron en destruir á unos cuantos bandidos, no se hizo, pues bastaba que el jefe de las fuerzas de la federacion que guarnecen esta plaza, hubiera tomado violentamente las providencias de su resorte para enviar expediciones á donde la humareda se levantaba; al fin esos soldados están eficazmente pagados sin gravámen del Estado, y no era lo mismo disponer de lo organizado, que organizar para expedicionar; pero ya que dicho jefe no cumplió con su deber, el Congreso ha tenido oportunidad de buen derecho y hay que respetarlo en él.

Por tanto, el Promotor concluye pidiendo, que se determine este negocio con la siguiente proposicion:

La justicia Federal no ampara ni protege á los individuos ocursores contra el decreto núm. 119 de la Legislatura del Estado de Sinaloa, fecha 5 de Abril últi-

mo, porque ésta ha obrado en uso de su soberanía constitucional.

Mazatlan, Mayo quince de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado).—*Damian Ballesteros.*

Sentencia del O. Juez de Distrito.

Mazatlan, Mayo veintiseis de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: Oídos los alegatos y el pedimento fiscal. Considerando: que el II. Congreso del Estado ha traslimitado sus facultades al decretar la contribucion del medio por ciento, el 5 de Abril último. Que aunque segun el pacto federal, los Estados son soberanos en todo aquello que concierna á su régimen interior. Que sin embargo esta soberanía está restringida por la Constitucion general. Que es un deber de todas las autoridades guardar y hacer guardar la Constitucion. Que este II. Congreso ha violado el art. 31, fraccion 2ª, seccion 2ª de la Constitucion general. Que es deber de los Tribunales de la federacion, vigilar por la exacta observancia de la Constitucion, hacer cumplir sus preceptos y amparar á todos los habitantes de la República, contra toda violacion de cualesquiera autoridad que pretenda consumirla. Que el art. 31 constitucional manda que todos los habitantes de la República, contribuyan á los gastos de una manera *proporcional y equitativa*. Que esta proporcion y equidad, se menosprecia en el decreto que impone la contribucion del medio por ciento con excepcion de los capitales que no excedan de mil pesos. Que no es equitativo hacer recaer el impuesto solo sobre una clase. Definitivamente juzgando y á nombre de la justicia federal, se falla bajo las siguientes proposiciones:

Primera: la justicia de la Union ampara y protege contra el decreto de 5 de Abril último, expedido por el II. Congreso del Estado, á los nacionales y extranjeros que

lo han solicitado; y son el Lic Francisco Romanillos, por sí y con poder de Antonio Peña por sí, y por la firma Peña y Cª de que es socio, y por D. Diego Peña, Fermin Irigoyen, Dª Rosa Arreola de Quevedo, Sanchez y Lewells, representados por su socio D. Juan Lewells; Ignacio Guerrero por sí, por Guerrero y Cª de la Noria de que es socio principal y con poder de D. José Vicente Laveaga, de San Francisco; testamentaria del finado D. Manuel Rubio, T. Heyman y Cª representados por D. Carlos Wolguardsen y Mateo Magaña.

Segundo: notifíquese y ejecútese, remítase copia certificada de esta sentencia á los periódicos para su publicacion, y otra certificada á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, para que se inserte en el *Semanario Judicial*. Remítanse sin demora los autos á la Suprema Corte para su revision.

El primer suplente del Juzgado de Distrito lo decretó y firmó con los de asistencia. —*Lic. Antonio Diaz Martinez.*—*A. Miguel Salas.*—*A. Ramon Lizárraga.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 30 de Abril del corriente año, promovió ante el Juez de Distrito de Sinaloa, el Lic. D. Francisco Romanillos por sí, y en representacion de los Sres. Peña y Cª, Diego Peña, Antonio Peña, Mateo Magaña y Cª Fermin Irigoyen, Sanchez y Lewell, Vicente Laveaga, Guerrero y Cª Ignacio Guerrero, testamentaria del finado D. Manuel Rubio, Heyman y Cª y Dª Rosa Arreola de Quevedo, todos vecinos del puerto de Mazatlan; que el Tesorero general del Estado les exige el medio por ciento que impone el decreto 119 de la Legislatura del mismo Estado, fecha 5 de Abril último, sobre to-

do capital y sueldo anual de mil pesos en adelante, con cuya disposicion dicen, se falta á la equidad y proporcion mandada por la fraccion 2ª art. 31 de la Constitucion federal, puesto que se exceptúan de pagar ese impuesto los capitales menores de mil pesos, habiéndose además faltado á lo que dispone la fraccion 3ª art. 30 de la Constitucion reformada del Estado, porque el impuesto que se versa, en caso de decretarse, debió, segun esta disposicion, haberlo sido en el primer período de sesiones ordinarias y no como lo fué en el último, de todo lo cual infieren los quejosos que ha habido de su parte, por el decreto mencionado, violacion de garantías individuales y procede el amparo que pretenden. Visto el informe del Tesorero responsable, contrainforme á que en sus operaciones respecto de los promoventes se ha reducido al cumplimiento del referido decreto, como causantes morosos; y en virtud del art. 7º del reglamento respectivo; el pedimento del Promotor fiscal sosteniendo la improcedencia del amparo; el alegato de los interesados, insistiendo en obtenerlo; y la sentencia del Juez de Distrito que lo otorga. Considerando: que el decreto núm. 119 de la Legislatura de Sinaloa, está expedido por autoridad competente en la órbita que le demarca la Constitucion de la República, puesto que la contribucion que establece es proporcional y equitativa entre todos los causantes que definen las circunstancias á que se refiere; y que en tal concepto no hay garantía violada ni procede el recurso promovido con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve:

Primero: es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Sinaloa, pronunciada en 25 de Mayo próximo anterior, en la parte que dice: «La justicia de la Union ampara y protege, contra el decreto de 5 de Abril último expedido por el II. Congreso del Estado, á los nacionales y extranjeros que lo han solicitado, y son el Lic. Francisco Romanillos por sí, y

con poder de Antonio Peña por sí, por la firma Peña y Cª de que es socio, y por D. Diego Peña, Fermin Irigoyen, Dª Rosa Arreola de Quevedo, Sanchez y Sewells, representados por su socio D. Juan Lewells, Ignacio Guerrero por sí, por Guerrero y Cª de la Noria de que es socio principal, y con poder de D. José Vicente Lavcaga de San Francisco, testamentaria del finado D. Manuel Rubio, F. Heyman y Cª representados por D. Carlos Wolguardson y Mateo Magaña.»

Segundo: la justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos, contra el decreto mencionado de la Legislatura dicha.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos mexicanos y firmaron.—S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—Ignacio Ramirez.—M. Ausa.—S. Guzman.—Luis Velaquez.—M. Zavala.—J. Garcia Ramirez.—Luis Maria Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México Junio veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.—Agustin Peralta, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por varios comerciantes nacionales y extranjeros ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, contra el ciudadano Tesorero general de este Estado, que les exige el medio por ciento que impone el decreto número 119 de la Legislatura del Estado, de 5 de Abril último.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal accidental dice: